



FUERZA Y DEBILIDAD DEL FRENTE POPULAR EN LA GUERRA CIVIL

Santos JULIA

Cuando se analizan las sucesivas políticas diseñadas por los gobiernos de la República Española —tanto en tiempos de paz como en la guerra— lo que llama con más fuerza la atención es su carácter de proyecto, de esbozo no cumplido. No porque falten las voluntades y ni siquiera porque no se elaboren los programas, sino por una especie de debilidad estructural, que afecta tanto al sistema político republicano considerado en su conjunto como a las distintas coaliciones que se sucedieron en el poder. Debilidad inaugurada por la primera coalición republicano/socialista y que impregnó profundamente su ambicioso programa —probablemente el único que pretendía de una manera global la reforma de la sociedad y del Estado— pero que puede predicarse también de la coalición de las derechas, que durante el primer año de su gobierno fue incapaz de desarrollar una política coherente de rectificación y que luego, en 1935, fracasó en el intento de desarrollar una política decididamente reaccionaria. Si 1932 y 1933 fueron suficientes para mostrar los límites del reformismo republicano/socialista, 1934 reveló que en España tampoco existía una coalición de fuerzas capaz de llevar adelante una coherente política conservadora, mientras 1935 evidenciaba que la temida reacción fascista estaba lejos de poder avanzar a la manera italiana o alemana. En este sentido, la revolución de los socialistas en octubre de 1934 es el correlato de la reacción fascista que la CEDA desplegó en 1935, malas copias ambas de sus respectivos originales.

Realmente, la República se caracterizó tanto por la abundancia y diversidad de proyectos o programas políticos —reformadores, revolucionarios, rectificadores, reaccionarios o fascistas— como por sus límites, sus debilidades y en definitiva su sucesivo fracaso.

Hipótesis sobre la debilidad política del Frente popular

El Frente popular español no se libró tampoco de esta norma general. Nunca tuvo un programa político que fuera no ya elaborado por todos los partidos y organizaciones que formaron la coalición, sino ni siquiera aceptado por cada uno de ellos sin reservas ni, claro está, llevado a la práctica desde el gobierno. Este fenómeno puede entenderse como manifestación de otro que afecta más radicalmente al sistema de la política y que está relacionado con la misma incierta composición del Frente popular en España y con su intermitente desaparición y renovación. Además de carecer de un programa explícito y aceptado por todos, el Frente popular careció de organismos centrales que establecieran una política común o que asistieran a los diferentes gobiernos en el desarrollo de esa política.

¿A qué se debe este hecho? Las razones parecen claras por lo que se refiere a la primavera de 1936. El programa firmado el 15 de enero sólo abusivamente puede llamarse programa de frente popular: fue elaborado por los republicanos —y más concretamente, por el partido republicano de centro, el Partido Nacional Republicano, que luego, para mayor paradoja, no firmaría el pacto— y presentado exclusivamente a los socialistas, cuya fracción de izquierda, fuerte sobre todo en la Unión sindical, se limitó a exigir que se incluyeran en el texto del programa los puntos de desacuerdo. Se dió así el caso de que el programa de una coalición incluyera también de forma expresa los desacuerdos entre sus partes. Pero siendo esto importante no era lo esencial, que radica, a mi juicio, en que por decisión de la UGT el gobierno que se formaría tras las elecciones no sería un gobierno de coalición sino exclusivamente republicano. Dicho de otra forma, la coalición, formada como mera alianza electoral, dejaría de existir el día siguiente de alcanzar su triunfo en las urnas. La composición y el programa del gobierno serían por tanto meramente republicanos. El gobierno fue, en realidad, expresión de la izquierda republicana y, aunque se apoyara parlamentariamente en otros partidos, podría temerse, como ya temía Togliatti, que «vacilaría considerablemente incluso para poner en práctica el propio programa de Frente popular» (1). Un programa que era la explícita manifestación de desacuerdos y un órgano ejecutivo que estaba lejos de representar al conjunto de fuerzas coligadas parecen razones suficientes para explicar la profunda debilidad política que afectó desde su constitución a los

gobiernos republicanos —mal llamados de frente popular— formados desde febrero de 1936.

Santos Juliá

Pero cuando esos gobiernos dejaron paso a un verdadero gobierno de coalición en septiembre de 1936, el sustituto tampoco se caracterizó por llevar adelante sin vacilaciones un programa explícitamente frentepopulista. La razón, en este caso, podría parecer exactamente la contraria de la anterior: si hasta septiembre de 1936 los gobiernos llamados de frente popular eran en realidad exclusivamente republicanos, a partir de septiembre los gobiernos presididos por Largo Caballero reunieron a un conglomerado de fuerzas que excedía con mucho a las que firmaron al pacto electoral. En esos gobiernos entraron los nacionalistas vascos de derecha, que se habían presentado a las elecciones de febrero en una candidatura propia; pero, además, y más importante, quienes asumieron en el gobierno, tras el reajuste de noviembre, las posiciones más relevantes fueron los dos grandes sindicatos que no sólo no habían aceptado nunca la política de frente popular —aunque la UGT hubiera firmado el manifiesto o programa electoral— sino que se habían mostrado adversarios decididos, en nombre de la revolución obrera, de los partidos que defendían una política de defensa de la República. Podría decirse que si los gobiernos republicanos no llevaron a cabo desde febrero a septiembre de 1936 una política frentepopulista por defecto, los gobiernos que les sucedieron desde ese mes hasta mayo de 1937 no la habrían realizado por exceso: con la revolución social en marcha, retornar a un programa de frente popular habría equivalido a dar un paso atrás, hacia la defensa de objetivos superados por la misma revolución.

En tales condiciones, el Frente popular no sería más que la fórmula política a la que recurrieron comunistas, socialistas y republicanos con objeto de asegurar una presencia subordinada en los organismos que sustituyeron, con la hecatombe del Estado, a las autoridades republicanas, e intentar desde ahí recuperar las posiciones perdidas para frenar primero y liquidar después la revolución. Disuelto en la práctica inmediatamente después de su triunfo electoral de febrero, el Frente popular aparece así, durante los primeros meses de guerra, como uno de los sectores que aglutinan distintas fuerzas contra la reacción, pero no el principal y ni siquiera el que es capaz de formular una política, un programa. No existe en esos momentos ningún acuerdo programático entre los partidos comunista, socialista y republicanos; no hay tampoco ningún comité nacional de frente popular, ni siquiera puede decirse que, considerados aisladamente, los partidos integrantes de la coalición de izquierdas de febrero tuvieran en julio un programa para hacer frente a la guerra y dirigir la revolución. La política frentepopulista, que era una política de defensa de la democracia, habría quedado desbordada por la revolución obrera dirigida en unas

regiones por la CNT y, en otras, por los comités o las alianzas obreras formadas por los dos grandes sindicatos. De ahí su debilidad.

Ahora bien, cuando se estudia la actuación de los dos grandes sindicatos desde la misma tarde del golpe y la política desarrollada por los gobiernos presididos por Largo Caballero como secretario general de la UGT con el apoyo, primero, y la participación enseguida de la CNT no es posible observar diferencias sustanciales con lo que en aquellos meses propugnaban quienes insistían en la necesidad de defender la República. Es más, los supuestos ideológicos y estratégicos en los que se fundamentó la línea política seguida por los dos sindicatos que se presentan como agentes de la revolución obrera no ofrecen tampoco grandes diferencias con la ideología y estrategia de los partidos comunista o socialista, a los que se presenta como liquidadores de las conquistas revolucionarias. En consecuencia, la tesis que quisiera mantener aquí es que desde los primeros momentos de la guerra la política desarrollada por las sindicales y los partidos se basó en similares supuestos estratégicos y realizó idénticos o muy parecidos contenidos prácticos, a los que cabe perfectamente la denominación de frentepopulistas, aunque tanto los anarquistas de la CNT como los socialistas de al UGT rechazarían indignados tal definición. Si esta tesis es cierta, la razón de la debilidad del conjunto de fuerzas que apoyaron a los gobiernos de la República en guerra —y que acabarían por ingresar, CNT y FAI incluidas, en el poco estudiado pacto de frente popular firmado en marzo de 1938— no radicaría tanto en el enfrentamiento de las políticas opuestas como en una lucha por la hegemonía que impidió resolver la crisis de poder abierta en la República a partir de la rebelión militar.

La común estrategia de coalición republicano/obrera

Y para empezar por el principio, es notorio que todos los partidos y los sindicatos reaccionaron igual ante las noticias del golpe de Estado. Por decirlo con las palabras de un dirigente de la CNT, nadie se atrevió entonces a «ir a por el todo» (2). En tal decisión, o más exactamente en tal falta de decisión, existía ya una opción estratégica de radical importancia para el futuro, sobre todo porque tampoco fueron a por el todo los dirigentes de la UGT que en los meses anteriores se habían negado a participar en gobiernos de coalición precisamente porque vivían, desde febrero de 1936, en la expectativa de ocupar en solitario todo el poder. Al no atreverse a destruir ni tomar el poder en Barcelona y Madrid, las dos grandes organizaciones obreras renunciaban de hecho a su proyecto de revolución y reconocían, sin acuerdo previo, que el combate contra la reacción concernía también a otras fuerzas políticas, de las que quizá abstractamente se podía y aun se debía prescindir, si no ani-

quilar, pero que en aquellas circunstancias concretas resultaba imprescindible o al menos conveniente tener al lado.

Pero ese era precisamente el supuesto estratégico básico de la política de frente popular para responder al golpe militar: que en aquellas circunstancias, la defensa de la democracia contra los ataques de la reacción exigía un frente común que no podía limitarse a la clase obrera. Probablemente, ninguno de los dirigentes sindicales, tanto de la CNT como de la UGT, que se habían negado a participar en una política de frente popular y fortalecer al gobierno republicano durante los meses anteriores, eran conscientes de que al formar comités unitarios y prestar su apoyo a las autoridades legítimas de la República lo que estaban haciendo era poner en marcha una política frentepopulista. Pero que no fueran conscientes de ella y que buscaran incluso diferenciarse orgánicamente del frente popular no quiere decir que no la hicieran.

La hicieron, evidentemente, de forma que intentaron reservar para ellos la parte del león. Son típicas de esos primeros meses las propuestas de representación en los diferentes comités, o también en los ayuntamientos y gobiernos, con una proporcionalidad entre sindicatos y partidos claramente favorable a los primeros. El Pleno Regional de Grupos Anarquistas de Cataluña, celebrado en Barcelona el 21 de agosto, aprobó la formación de un comité de enlace «para hacer más eficiente la acción revolucionaria de los trabajadores contra el fascismo» y reforzar la unidad ya realizada en los combates de julio, «compuesto por 2 representantes de la CNT, dos de la UGT, uno de la FAI y uno del PSU» (3). En el Pleno Nacional de Regionales convocado por la CNT para estudiar el ofrecimiento de participación en el gobierno de Largo Caballero el 3 de septiembre, se formuló la contrapartida de crear en cada ministerio unas juntas asesoras compuestas por dos representantes de la UGT, otros dos de la CNT y dos más del Frente popular (4). Dos semanas después, y en el último intento de proponer una alternativa de gobierno vergonzante, la CNT hablará de la constitución en Madrid de un Consejo Nacional de Defensa, «compuesto por el momento de todos los sectores políticos en lucha contra el fascismo» y con una proporcionalidad de «cinco delegados de la UGT (marxistas), cinco de la CNT y cuatro republicanos», manteniéndose expresamente «la continuidad de la Presidencia de la República en la persona que la detenta» (5).

Mientras la CNT aclaraba su estrategia, el secretario general de la UGT y lo que se conocía como tendencia marxista o revolucionaria del Partido Socialista había decidido, a pesar del «desagrado» que les producía la idea de «un gobierno de coalición con gentes de ideología distinta y aún antagónica», encabezar un gobierno con notoria presencia de todas las fuerzas políticas que luchaban contra la rebelión (6). Idéntica estrategia se siguió en la formación

de gobiernos regionales como el de la Generalitat de Cataluña, el Comité Ejecutivo Popular de Levante e incluso, tras algunos forcejeos, el Consejo de Aragón. El gobierno vasco, por su parte, fue también consecuencia de la misma opción estratégica aunque en este caso la representación obrera resultara claramente minoritaria.

Al respetar a las autoridades republicanas durante las jornadas revolucionarias de julio y al dirigir, apoyar o integrar gobiernos de coalición con republicanos, socialistas y comunistas, los dirigentes obreros echaban las bases de una política frentepopulista, cuyos contenidos esenciales se desprendían necesariamente de esa primera opción estratégica. Ante todo, era una política que, en nombre de las exigencias del presente y del objetivo prioritario de ganar la guerra, trataba de posponer todo el potencial revolucionario de la clase obrera para un indeterminado momento del futuro. Los dirigentes obreros estuvieron de acuerdo en que la implantación del socialismo libertario al que aspiraba la CNT o de la sociedad socialista que pretendía la UGT debía esperar al triunfo militar. La demora no significaba una renuncia y exigía, para que no lo fuese, la conquista de una posición indestructible en el seno de las fuerzas leales a la República. Desde ella se garantizaría la solidez de lo ya conquistado, se establecería un bloque de poder obrero en el gobierno y se adoptarían las medidas necesarias para consolidar los avances revolucionarios y preparar el triunfo militar.

De este primer supuesto estratégico se derivó luego todo el programa político de los gobiernos de coalición de sindicatos y partidos presididos por Largo Caballero: creación de un ejército regular, militarización, restablecimiento del Estado, centralización o coordinación de la actividad económica, nacionalización de las industrias de guerra, respeto o defensa legal de la pequeña y mediana propiedad privada, contención de los experimentos de revolución social, pactos de unidad de acción entre partidos y entre sindicatos. La autoría de ese programa —que es sustancialmente idéntico al de frente popular— y su defensa, se ha atribuido a los comunistas, tal vez porque fueron ellos los primeros en formularlo explícitamente y propagarlo con machaconería y sin desmayo. Pero esa misma política fue defendida también, y desde muy pronto, por los dos grandes sindicatos precisamente porque la CNT sufriera un proceso de «oligarquización» paralelo a su politización y no pudiera sustraerse a las mismas tendencias que criticaba en los socialistas: burocratización, pérdida de la espontaneidad, persistencia de la dominación. La CNT y la FAI —y lo mismo es válido también para la UGT que bajo la dirección de Largo Caballero había adoptado posiciones revolucionarias desde 1934— no habrían podido participar en comités unitarios ni llegados al gobierno del Estado si no hubieran partido de unos supuestos estratégicos muy similares al del resto de las fuerzas políticas. En efecto, las primeras decisiones que determinaron luego

el curso de los hechos se tomaron antes de que hubiera podido comenzar el proceso, discutible por lo demás, de oligarquización o burocratización. Cuando la CNT dejó a Companys en su puesto y, poco después, cuando participó en el gobierno de la Generalitat o en los múltiples comités de defensa o de enlace con otras fuerzas sindicales y políticas no había tenido tiempo de sufrir proceso alguno regido por la ley de hierro de las oligarquías. Probablemente, el hecho de que esta ley no pudiera mostrar todos sus efectos en una organización como la CNT explicaría mejor su derrota que el recurso a un supuesto «divorcio entre las instancias superiores de decisión y la base de la CNT-FAI».

Prioridad de la guerra y exaltación nacional/popular

La identidad de esos supuestos es manifiesta sobre todo en la prioridad que sobre la revolución se concede a la guerra, tesis que, junto a la defensa de los gobiernos de coalición, constituye la clave de la política frentepopulista y que es habitual atribuir en exclusiva al Partido Comunista. Y ciertamente, fue el PCE el que de forma más rotunda enunció el principio de que «ganar la guerra es la ley suprema que determina la acción de nuestro Partido, en estos momentos» (8). Pero, en realidad, se trata de una tesis compartida por todos y elevada a núcleo del «programa ministerial» enunciado en la primera declaración del primer gobierno de coalición presidido por Largo Caballero. Allí se dice, en efecto, que al triunfo sobre la rebelión «se subordinan cualesquiera otros intereses políticos, dando de lado a diferencias ideológicas puesto que de momento no puede existir otro afán que el de asegurar el aplastamiento de la insurrección» (9).

Es, por lo demás, y aunque sobre este punto se haya llamado menos la atención, una tesis afirmada reiteradamente por los dirigentes de la CNT y de la FAI. «Para que se consiga el triunfo de hoy, para que se realice este triunfo, se requiere una supeditación absoluta de nuestra vida y de nuestras actividades a la guerra»: tal afirmación podría haber salido de la boca de un comunista, pero es nada menos García Oliver quien la pronuncia (10). Los anarcosindicalistas no habían pensado nunca que la revolución tendría que avanzar a través de una guerra y cuando se encontraron ante el fenómeno reaccionaron supeditando las realizaciones revolucionarias a la necesidad previa del triunfo militar: incluso el ideal soñado del federalismo se les aparece «no practicable» en régimen de guerra (11). Evidentemente, tampoco lo era el comunismo libertario, que habría de esperar años. Sin duda, la revolución estaba en marcha y para algunos sería ya difícil alcanzar de nuevo la cumbre revolucionaria del 19 de julio, pero se dejaba a las generaciones venideras la tarea de terminar la obra. De momento, «lo primero era ganar la guerra» ya que la revolución no podía ser sino «resul-

tante de la guerra popular». Para «hacer de la revolución una realidad definitiva había que ganar la guerra. Era preciso centrar toda la atención, toda la voluntad, toda la pasión, todos los recursos en la guerra»: es ahora Abad de Santillan quien habla, desencantado ya del rumbo por el que marchaba tanto la guerra como la revolución después de los sucesos de mayo. Pero es también la doctrina oficial de la organización, cuando por boca de su secretario general explica a un redactor del Manchester Guardian que el único objetivo de la hora actual consiste en ganar la guerra y que no queda tiempo para discutir los proyectos anarquistas, comunistas o republicanos (12).

La prioridad de la guerra no era el único supuesto ideológico que acercaba a las organizaciones obreras y a los partidos políticos y que permite definir la política de unos y otros como frentepopulista. Además de prioritaria, comunistas y sindicalistas definían la guerra como lucha por la independencia nacional, como guerra contra el fascismo o contra una invasión extranjera. Era la defensa de la nación contra el extranjero, la lucha del pueblo español contra fuerzas mercenarias (13). De ahí a la exaltación del carácter nacional de la guerra no había más que un paso que todos dieron sin dudar y desde el primer momento. «Guerra antifascista que debe asegurar la independencia del país», es una relativamente temprana definición de García Oliver que le acerca de forma sorprendente al carácter que el Partido Comunista pretendió dar desde el primer momento a la guerra civil y que encontró su fórmula codificada en la resolución del pleno ampliado de 5 de marzo de 1937: «guerra de independencia nacional contra la invasión militar colonizadora del imperialismo fascista de Alemania e Italia» (14).

Todos los viejos principios del anarcosindicalismo, los de orden individual, corporativo, sindical y político, a pesar de haberse mantenido durante lo meses de guerra no han sido suficientes, aseguraba el mismísimo García Oliver, para avanzar ni un kilómetro y esto es así porque se echa en falta «el gran principio nacional». Sin ese principio, añadía, será imposible avanzar un paso. Precisamente, el clamor nacionalista, la apelación al espíritu de la raza, la insistencia en el pueblo español como sujeto mesiánico, será un motivo constante del discurso anarquista (15) y comunista y valdrá a la CNT alguna llamada de atención por parte de la Asociación Internacional de Trabajadores.

Centralización económica y respeto a la pequeña propiedad

De unos presupuestos estratégicos e ideológicos similares no es sorprendente que se derivaran parecidas consecuencias prácticas. Ante todo, la urgencia de establecer lo que Juan López llama una «unidad férrea sobre dos casos»: la organización militar y la eco-

nómica. Es significativo hasta qué punto preconiza la CNT la creación de una organización militar «unificada férreamente» y la necesidad de «disciplina, mando único y la más estrecha y cordial unión» (16). Se conoce la insistencia comunista en la utilización de los símbolos del hierro y el acero: indican bien qué tipo de unidad se perseguía y el límite de resistencia que era preciso ofrecer al enemigo. Pero los anarcosindicalistas fueron también generosos en el empleo de idéntica simbología y no se mostraron escrupulosos en la utilización de métodos coactivos —que decían abominar en los partidos políticos— para garantizar esa férrea unidad (17).

Y lo mismo podría decirse de la organización económica. El partido comunista había proclamado desde muy pronto, y reafirmado luego de mil maneras y en todas las ocasiones, la necesidad de acabar con una situación definida de «autonomía arbitraria» en la que cada sindicato podía dirigir una fábrica, un taller o cualquier centro de producción «por sí y ante sí» determinando autónomamente la producción y distribución. Frente a esa situación, que los comunistas consideraban la causa de la ruina de las industrias, proponían la creación de un Consejo Coordinador que bajo la autoridad del ministerio correspondiente procediera a la nacionalización de la industria y a la distribución racional de los recursos económicos (18).

Los gruesos trazos con que los comunistas pintaban las consecuencias de las incautaciones de las fábricas por cada sindicato no eran en absoluto privativos de ellos. Con el argumento, tantas veces repetido luego por historiadores, de que «los trabajadores españoles no estaban bastante preparados», Abad de Santillán se refiere al «sentido propietario de los comités de control» que tuvieron que combatir enérgicamente. Es también Abad de Santillán quien relata cómo de «la militancia sindical revolucionaria había surgido el fenómeno social de los asaltos a mano armada» o la forma en que los comedores populares al consumir todas las reservas de la ciudad y el campo sus responsables «salían directamente a requisar víveres» arruinando así la economía de la región. Y Juan Peiró, que se hace cargo del ministerio de Industria en noviembre, afirma que la «economía se hundía de un modo casi vertical» a consecuencia precisamente de que las incautaciones se había efectuado de una «manera improvisada» y de las diferencias existentes entre industrias controladas incautadas y colectivizadas (19). Hoy se conoce además la resistencia —confundida a veces con nuevas formas de protesta— que la clase obrera ofreció al trabajo en forma de absentismo o bajo rendimiento. Pero lo importante es que la fórmula ideada por los militantes de la CNT para remediar esa situación era exactamente la misma —aunque su agente fuera otro— que la comunista: coordinar articulando en «un solo organismo nacional el elemento rector de nuestra Economía». Esa era, al menos, la fórmula que le parecía necesaria a Juan López, minis-

tro cenetista de industria para que «podamos impedir la acción caótica que se produce» en la Economía al mantener «la separación de unos pueblos contra otros» (20).

Esta necesidad de coordinar o centralizar, es decir, de establecer organismos nacionales con competencias sobre las unidades de producción acerca más a todos los agentes políticos y sindicales de lo que pueda separarles la persistente discusión sobre colectivización y nacionalización. De hecho, el problema no radica en si el propietario de la tierra era la colectividad campesina o el Estado que dejaba a los campesinos la tierra en usufructo. Desde el punto de vista legal, todas las fórmulas eran posibles. El problema consistía en cómo se distribuían los créditos o se garantizaba la cosecha y en los canales de comercialización. Y a este respecto, la propiedad jurídica de la tierra, fuese estatal o colectiva no resolvía nada. El problema estaba más en la coordinación económica que en los títulos de propiedad. Y por lo que se refiere a la coordinación todos insistían en lo mismo: no se podía continuar por el mismo camino si no se quería asistir a la ruina de la producción.

La misma coincidencia se extendía también a la amplitud que debían alcanzar las colectivizaciones y/o nacionalizaciones. En efecto, no hay una disparidad radical entre la política defendida por los comunistas de respetar al pequeño propietario agrícola y considerar «archisagrado el fruto del trabajo del labrador» y lo que Mariano R. Vázquez decía al corresponsal británico cuando le aseguraba que «la pequeña propiedad, el pequeño comercio, los artesanos serán respetados» y que serían castigados los ataques contra ellos (21). Respetar implicaba, más concretamente, no obligarle a colectivizar su tierra si no era ese su deseo y, por otra parte, no someterle a requisas. En este punto, el acuerdo era común y no se limitaba a los dirigentes de las organizaciones: el Congreso Regional de Campesinos de Cataluña, de la CNT, celebrado en septiembre de 1936, o sea, cuando aún no había pasado el auge del movimiento colectivizador ni se había formado la nueva «oligarquía obrera», tras hacer un canto a la «abnegación y el sacrificio» y aun sin olvidar la «pasión mezclada de egoísmo ancestral» que caracteriza al campesino catalán, aprobó por unanimidad respetar el cultivo de los pequeños propietarios «siempre que esto no obstruya o dificulte el desarrollo de los núcleos que se colectivicen» (22). Es obvio, por lo demás, que los anarcosindicalistas no procedieron a colectivizar la tierra en Cataluña ni siquiera cuando pensaron que tenían todo el poder, o como diría García Oliver, cuando eran los amos. Hay una colectivización parcialmente forzada en Aragón por «los grupos armados procedentes del exterior» (23) y es significativo que, más de un año después, un sindicato local de la CNT pretendiera impedir la celebración de una asamblea de Izquierda Republicana con el pretexto de que, si se permitiera, más de la mitad de los afiliados al sindicato se darían de baja y

pasarían a engrosar las filas de esa otra agrupación (24). Pero la colectivización forzosa no se produjo ni en Cataluña, ni en Valencia, ni en las regiones andaluzas que no cayeron en manos de los rebeldes. Después de un período en que la historiografía ha exaltado a la CNT como único agente de la colectivización, los resultados de la más reciente investigación revelan que existieron más colectividades dirigidas por la UGT que por la CNT, lo que por otra parte pone de manifiesto que el proceso de revolución social acaecido en el territorio de la República consistió más en una sindicalización de la economía que en su colectivización.

Una política de pactos que oculta una lucha por la hegemonía

Si se partía de similares supuestos estratégicos e ideológicos y si las líneas maestras de la política económica y social no divergían sustancialmente —aunque es obvio que las metas finales de cada cual eran no ya distintas sino contradictorias, lo que sin embargo para la inmediata práctica política no constituía un mayor obstáculo pues que todos estaban de acuerdo en que sus metas finales eran, de momento, imposibles de alcanzar— habrá que buscar por otro lado las razones de la debilidad de la política frentepopulista. Quizá se puedan encontrar en la permanente lucha por la hegemonía que, bajo el manto de las llamadas a la unidad y de los tratos para alcanzar pactos de acción común, se estableció entre las distintas fuerzas que combatían la rebelión militar y que no pudo decidirse en el curso de la guerra a favor de ninguna de ellas.

Que la política económica, social o militar de sindicatos y partidos no fue, tras el golpe militar, sustancialmente distinta se pondría muy pronto de manifiesto en las promesas de respeto y ayuda mutua y en la búsqueda de pactos de unidad de acción. Por una parte, es notorio el apoyo que la CNT prestó al primer gobierno presidido por Largo Caballero y en el que estaría presente más adelante junto a católicos, comunistas, socialistas y republicanos. Ya desde el día siguiente a su formación, la CNT se apresuró a declarar que «toda la España obrera y antifascista estará» al lado del nuevo gobierno y a insinuar que, en el caso de que la propia CNT entrase en él, su presencia tendría que ser tan importante al menos como la de la UGT (25). La convicción de defender la misma causa —obrero, popular, nacional, antifascista— es evidente en estas manifestaciones de apoyo.

Pero esta convicción ofrecía otra cara: todos los que se encontraban en la misma nave creían que sin ellos se perdería el rumbo y harán, por tanto, todo lo posible para asegurarse en ella una posición tan sólida que impida al menos su desvío de las metas finales que cada cual se había trazado y que continuarán apareciendo en sus manifiestos y discursos. De momento, parecía como

si en la nave hubiera un sitio para cada cual y suficiente lugar para todos: la primera estrategia de constituir comités con la presencia de todas las organizaciones obreras y todos los partidos políticos para aplastar la rebelión o resistir el avance de los rebeldes dio lugar a un clima de exaltación de la unidad que encontró su expresión culminante en la defensa de Madrid.

Pero esa misma defensa, y la evidente imposibilidad de que el gobierno de la República pasara a una victoriosa ofensiva, a la par que abrió la perspectiva de una guerra de larga duración supuso un significativo cambio en la relación de fuerzas leales a la República. Mientras las organizaciones sindicales se mostraban más que ineficaces en la dirección de la guerra, los partidos políticos reforzaron notablemente su posición gracias sobre todo al nuevo papel asumido por los comunistas. De la marginalidad que había caracterizado su trayectoria desde el mismo momento de la proclamación de la República, el Partido Comunista se convirtió — gracias a la ayuda soviética, desde luego, pero también a su mayor capacidad para atraer a los jóvenes que eran, al cabo, quienes combatían— en su principal fuerza de apoyo y de ahí pretendió pasar a constituirse en su fuerza hegemónica. Su renovada importancia permitía, por otra parte, a la dirección del Partido Socialista salir de su pasividad política y buscar en un contacto más estrecho con los comunistas la forma de recuperar la iniciativa perdida desde el ascenso de Largo Caballero al poder.

Fue así como, después de la defensa de Madrid, la primera estrategia «frentista» de creación de comités unitarios se convirtió en necesidad de formar alianzas o pactos con objeto de no perder posiciones con vistas a después de la guerra. La exaltación unitaria de los primeros meses dejó paso, con el primer duro invierno de guerra, a un clima de crecientes suspicacias y reproches. Surgieron distintas iniciativas de alianzas o pactos de unidad de acción o de creación de comités de enlace que pretendían unificar fuerzas con el objeto tanto de aumentar la propia como de debilitar la de los demás. De esas iniciativas, las que llegaron a adquirir mayor envergadura fueron el proyecto de constitución de una Alianza Obrera Revolucionaria, entre la CNT y la UGT, y el pacto de unidad de acción entre el PSOE y el PCE.

En el primer caso, es evidente, tanto en la CNT como en un importante sector de la UGT, el propósito de alcanzar una alianza revolucionaria con objeto de desplazar a los partidos políticos del poder. Para la CNT, la revolución consiste en «conseguir que los trabajadores, administrando por medio de los sindicatos toda la vida económica del país, desplacen y anulen para siempre la vieja política que nos ha llevado a la ruina». La política, calificada como el mangoneo de los charlatanes en la vida pública, es un factor de desunión y discordia y debe ser sustituida por la administra-

ción directa de las cosas. De ahí que los partidos, tolerados hoy porque sirven a la revolución social como la sirve también la pequeña burguesía, «no tendrán nada que hacer en el mañana próximo» (26).

Los sindicalistas percibían que detrás del énfasis en ganar la guerra se escondía la reivindicación del poder para los partidos políticos y temían que la aproximación entre los partidos comunista y socialista, iniciada desde los primeros días de enero de 1937, desembocara en la aspiración a dirigir políticamente lo que los sindicatos de productores habrían de administrar por sí mismos. La insistencia en alcanzar un acuerdo con la UGT tiende, sencillamente, a contrarrestar ese peligro por medio de la formación de un bloque de organizaciones obreras. Sin duda, un sector de la UGT, precisamente el encabezado por Largo Caballero, era sensible a esta clase de consideraciones y alentó tanto la negociación para llegar a esa alianza como los ataques a los partidos, acusados de fomentar la discordia y la desunión por anteponer intereses partidistas y de grupo al interés general de ganar la guerra (27).

Por su parte, la iniciativa de alcanzar un pacto de unidad de acción y establecer un comité de enlace entre el Partido Comunista y el Socialista tuvo desde su origen como evidente finalidad someter a los sindicatos y subordinarlos a la dirección política que sólo los partidos debían garantizar. Este objetivo es manifiesto en las circulares que una ejecutiva del Partido Socialista renacida a la vida política envía a sus secciones y es explícito en los discursos pronunciados por los dirigentes comunistas (28). No se trataba, evidentemente —porque no podía tratarse— de arrebatarse a los sindicatos la posición que habían conquistado en la actividad económica, pero sí de reducirlos a esa actividad y convertirlos en fuerzas auxiliares de un gobierno que debía estar dirigido por los partidos.

Esta lucha por la hegemonía debilitó al gobierno de Largo Caballero —quien, por lo demás, se mostró incapaz de imponer la suya propia— e impidió que los planes de restablecimiento del Estado, militarización y creación de un ejército regular, centralización económica y respeto a la pequeña propiedad, en lo que todos estaban de acuerdo, alcanzasen un resultado satisfactorio. La crisis de mayo de 1937 quizá podría considerarse como expresión de esa radical debilidad y momento de inflexión del poder sindical y del retorno de los partidos a los puestos de dirección política del Estado y de la guerra y no como triunfo de una contrarrevolución efectuada en nombre del frente popular sobre una revolución alentada y dirigida por el anarcosindicalismo. La lucha por la hegemonía entre sindicatos y partidos que llena la primera mitad del año 1937 acabó en mayo con la victoria de los segundos (29).

Pero esa victoria no señalaría el fin de las luchas internas. Debido probablemente a lo que Togliatti consideraba una «errónea valoración» del Partido Comunista y a que el éxito del derrocamiento de Largo «se les ha subido a la cabeza», lo cierto es que después de mayo surgió entre los comunistas la opinión de que el partido «podía ya plantear la cuestión de su hegemonía y luchar abiertamente por esa hegemonía en el gobierno y en el país. Togliatti pensaba que tal valoración incurría en el error de menospreciar el papel jugado por el Partido Socialista —los centristas— en la caída de Largo y, sobre todo, olvidaba que los sindicatos tenían en España «su tradición y su historia» y que era preciso tenerlos en cuenta. Precisamente, que no se discutiera ni una sola vez en el secretariado una cuestión sindical era para Togliatti uno de los dos errores más graves del partido. El otro era que el partido no ponía en práctica de modo consecuente una política de Frente popular» (30).

En efecto, las luchas por la hegemonía que tendrán lugar en el seno del Frente popular a partir de mayo de 1937 se deben sobre todo a la agresividad que caracteriza desde entonces al PC y que tan manifiesta aparece a quien compare el contenido y el tono de los discursos pronunciados en el pleno de marzo, bajo el signo de contención que caracteriza a José Díaz, con los del pleno de junio, dominado por la exaltación de Dolores Ibarruri, que asume sin complejo alguno, y por enfermedad del secretario general, la tarea de presentar el informe político. Los comunistas, empeñados ya en la persecución puramente policiaca del POUM, llegaron a pensar, por una parte, que la controversia con los anarquistas podía solventarse por las armas; y, por otra, que los socialistas estaba abocados a su disolución y a dejarse absorber en un Partido Unico del Proletariado que sería, naturalmente, un partido comunista ampliado, una especie de PSUC para toda España. La política de presión militar contra los anarquistas y de presión política hacia los socialistas produjo, como el mismo Togliatti no dejó de observar, un creciente aislamiento de los comunistas y, en el fondo, y para lo que aquí nos interesa, una permanente debilidad en el Frente popular.

Pues si es cierto que entre los éxitos de la política seguida por los comunistas después de mayo debe contarse la ampliación del comité de enlace con el Partido Socialista y la firma de un programa de acción común (31), no hubo sin embargo ningún progreso en la meta real que el PCE se propuso de forma perentoria y con tono dramático a partir del pleno celebrado en Valencia durante el mes de junio: la unificación o fusión de socialistas y comunistas en un solo partido que se definiría por «seguir los postulados de Lenin y Stalin» (32). La misma impresión de que no se avanzaba nada a pesar de la firma de acuerdos se podría hacer extensiva a la constitución, por vez primera desde el mismo inicio de la política frentepopulista, de un Comité nacional de Frente popular con la

presencia de representantes de los cuatro partidos políticos nacionales, PCE, PSOE, Izquierda Republicana y Unión Republicana. «Para arrancarles la menor declaración pública es necesario un trabajo enorme», escribía Togliatti, a cuya perspicaz mirada no se le escapaba que «las intrigas para hacerlo naufragar se multiplicaban por todas partes» (33).

Los reveses militares y el avance rebelde hasta el Mediterráneo provocaron un nuevo reagrupamiento de fuerzas con la firma en marzo de 1938 de un sorprendente pacto entre la UGT y la CNT —que en modo alguno puede considerarse como una reacción contra el gobierno Negrín sino todo lo contrario (34)—; la entrada de los dos grandes sindicatos y de la FAI en el comité nacional del Frente popular y, finalmente, el retorno de los sindicatos al gobierno (35). Pero en esa nueva fundación del Frente popular es evidente su función meramente instrumental de «ayuda al poder público» sin que se le asigne más misión que la de coordinar la actividad de los partidos y las organizaciones sindicales con objeto de apoyar al gobierno (36). Evidentemente, en el seno de cada una de las fuerzas que enviaron sus representantes al nuevo comité nacional había ya tantos partidarios, al menos, de la negociación y el compromiso como de la resistencia hasta una victoria cada vez más improbable. El Frente popular se mantendrá como lugar de encuentro de quienes pensaban que todavía era posible resistir pero su actuación y su eficacia será meramente simbólica: su programa se reduce a manifestar el apoyo al gobierno y su actividad no es otra que llamar la atención de las autoridades sobre cuestiones de segundo orden. Pero por lo que se refiere a la cuestión central que se plantea desde abril de 1938 —compromiso o resistencia— el Frente popular no será capaz de alinear a todas las fuerzas políticas tras cualquiera de esas opciones (37).

Podría concluirse, pues, que si la fuerza del Frente popular durante la guerra procede de la identidad de los supuestos ideológicos y estratégicos de partidos y sindicatos y de la similitud de políticas aplicadas por cada uno de ellos, su permanente debilidad no obedeció tanto a una radical contradicción entre revolución y defensa de la República, como a una lucha permanente por la hegemonía política. Tras el derrumbamiento del Estado republicano, fue imposible establecer ninguna política eficaz desde el poder central: el liderazgo de la defensa de la República y de la revolución social correspondió, en los primeros meses, a los dos grandes sindicatos que, sin embargo, no pudieron culminar con éxito ninguna de esas dos tareas. La debilidad del gobierno dirigido por líderes sindicales se hizo patente en el abandono de Madrid, la pérdida de Málaga y los acontecimientos de mayo de 1937. De ahí resultó un gobierno sostenido en un pacto de unidad de acción entre el Partido Comunista y el Socialista. Pero, de nuevo, los reveses militares pusieron de manifiesto la debilidad de esta fórmula

que en abril de 1938 pretendió reforzarse con la ampliación del Frente popular y la reintegración al gobierno de las organizaciones obreras. Para entonces, sin embargo, el aislamiento del PC, la irreparable escisión de la UGT y del PSOE, las tensiones entre sectores de la FAI y la CNT, entre la Regional catalana y el comité nacional, el cansancio de la guerra y las dificultades para recuperar la iniciativa militar abrieron un nuevo frente de lucha: el de quienes pretendían resistir a toda costa y el de quienes se mostraban partidarios de la negociación o el compromiso. Cuando, tras la caída de Cataluña, estos inclinaron la balanza a su favor, con el golpe militar de Casado, del Frente popular no quedó más que un recuerdo pervertido por el encono de las luchas internas y la magnitud de la derrota.

Ponencia presentada en la Conferencia Internacional «I Fronti popolaria: bilancio storico di un'esperienza», organizada por el Instituto Gramsci de Parma y celebrada en esa ciudad los días 19, 20 y 21 de mayo de 1988.

(1) Palmiro Togliatti, «La victoria del Frente popular», *Bolshevik*, 15 de marzo de 1936, en *Escritos sobre la guerra de España*, Barcelona, 1982. p. 55.

(2) García Oliver cuenta que en el Pleno de 23 de julio de 1936, él propuso «ir a por el todo» pero fue derrotado. Más tarde, en mayo de 1937, también creía que «éramos los verdaderos amos de la situación», pero de nuevo parece haber defendido con entusiasmo la política contraria. Ver *El eco de los pasos*, Barcelona, 1978, pp. 429-437.

(3) «Acta del Pleno Regional de Grupos Anarquistas de Cataluña celebrado en Barcelona el 21 de agosto de 1936». Archivo Histórico Nacional. Salamanca (AHNS). Serie Bilbao, leg. 39.

(4) Cit. por César M. Lorenzo, *Los anarquistas españoles y el poder*. París, 1972, p. 181.

(5) «Dictamen emitido por la ponencia nombrada por el Pleno de Regionales de la CNT para dictaminar sobre el cuarto punto del orden del día». AHMS, Bilbao, 39.

(6) La frase es de una carta que Luis Araquistáin dirigió a Largo Caballero el 24 de agosto de 1936 proponiéndole la formación de un gobierno en el que fracción de izquierdas del socialismo se reservara «los centros claves de la guerra y la revolución». Fundación Pablo Iglesias. Archivo Histórico.

(7) Walter L. Bernecker, *Colectividades y revolución social*. Barcelona, 1982. p. 445.

(8) Pleno Ampliado del CC del PCE, *Lo que el Partido Comunista considera indispensable hacer para ganar la guerra*. Barcelona, 1937, p. 10.

(9) «Declaración ministerial», *Claridad*, 5 de septiembre de 1936.

(10) Juan García Oliver, *El fascismo internacional y la guerra antifascista española*. Conferencia pronunciada en el cine Coliseum de Barcelona el día 24 de enero de 1937, p. 13.

(11) Juan López, *Concepto del federalismo en la guerra y en la revolución*. Conferencia pronunciada en el cine Coliseum de Barcelona el día 7 de febrero de 1937, p. 9.

(12) Diego Aban de Santillán, *La revolución y la guerra en España. Notas preliminares para su historia*. Habana, 1938, p. 69 y «Declaraciones del compañero Mariano R. Vázquez», CNT, 13 enero 1937.

(13) «Unidad nacional contra el invasor extranjero» podría ser una frase de Dolores Ibarruri, pero en este caso lo es de Federica Montseny, que señala además la necesidad de establecer, entre otras, «la unidad racial contra el invasor», en *La Commune, primera revolución consciente*.

(14) *Lo que el Partido Comunista considera indispensable hacer para ganar la guerra*. Resolución del Pleno ampliado del Comité Central del PCE, sobre el informe hecho por el camarada Díaz, el 5 de marzo de 1937, s.l., 1937.

(15) Reunidos los «camaradas de todas las tendencias, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas», Federica Montseny celebrará en ellos «el espíritu indómito de la raza» y reafirmará su creencia en que «España era un país predestinado a convertirse en país mesías», *La Commune de París y la revolución española*. Valencia, 1937. Ver, por parte comunista, Jesús Hernández, *El orgullo de sentirnos españoles*. Barcelona, 1938.

(16) Juan López, l.c., para lo primero, y «Ganar la Guerra y organizar la revolución», CNT, 9 enero 1937, para lo segundo. Juan Peiró señalará que la CNT no tuvo más remedio que «transigir con el mando único, con el ejército regular y con la imposición de la disciplina en la retaguardia», *De la fábrica de vidrio de Mataró al Ministerio de Industria*, Valencia, 1937, p. 10.

(17) Compárese, por ejemplo, de Juan López «La organización militar tiene que ser unificada férreamente» o.c., p. 10, con esta obra: «en el gran ejército popular que se está formando, hay que establecer una disciplina férrea y una obediencia absoluta a los mandos», de *El camino de la victoria*. Llamamiento del Partido Comunista a todos los pueblos de España y a cuantos aman la paz, el progreso y la libertad. Valencia, s.f. (pero dic. 1936).

(18) *El camino de la victoria*, cit.

(19) Juan Peiró, l.c., p. 14.

(20) Hay un interesante trabajo de M. Seidman, «Workers resistance to work in Paris and Barcelona during the Popular Fronts» (ponencia presentada a la Conferencia Internacional sobre Frente popular en Francia y España, Southampton, 1986). No creo que esa resistencia pueda entender-

se como manifestación de protesta dirigida contra unos comités que reproducían el tradicional comportamiento autoritario, como hace Julián Casanova, «Las colectivizaciones», *Historia 16, La guerra civil*, vol. 16, p. 49. La propuesta de Juan López, en l.c.

(21) La política agraria de los comunistas —que es la del Frente popular— está ampliamente expuesta por Vicente Uribe en *Los campesinos y la República*, Valencia 91937), *Nuestra labor en el campo*, Barcelona, 1937 o *La política agraria del Partido Comunista*, Barcelona, 1937.

(22) CNT AIT, *Congreso Regional de Campesinos de Cataluña. Memoria, Septiembre 1936*. Barcelona, pp. 22 y 23.

(23) Julián Casanova, *Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938*. Madrid, 1985, p. 120.

(24) Carta del CN de la CNT al CR de Aragón, 15 de enero de 1938, dando cuenta de la visita de una comisión de Samper de Calanda. SHM, aru. 46.

(25) «La CNT y el nuevo gobierno», *CNT*, 5 septiembre 1936.

(26) Ver editoriales de *CNT* de 1 y 2 de enero de 1937, «1937 será el año de la victoria» y «Los sindicatos y la política».

(27) Ver, especialmente, la «Sensacional declaración de Largo Caballero», reproducida en *Claridad*, 27 de febrero 1937.

(28) PSOE. Comité Nacional, «A los comités de las agrupaciones socialistas», marzo de 1937, donde se combate la «sobrestimación de los sindicatos» que les ha llevado a considerarse «ejes del Estado». La política sindical del PCE puede verse en Antonio Mije, «El papel de los sindicatos en los momentos actuales» (conferencia pronunciada en Valencia el 1 enero de 1937), *El Partido Comunista por la libertad y la independencia de España*, y en Manuel Delicado, *Los problemas de la producción, la función de los sindicatos y la unidad sindical*, Madrid, 1937.

(29) S. Juliá «Partido contra sindicato: una interpretación de la crisis de mayo de 1937», en *Socialismo y guerra civil*. Anales de la Fundación Pablo Iglesias, 2, 1987, pp. 325-346.

(30) Informe de 30 de agosto de 1937, *Escritos*, pp. 129 ss. Los comunistas, según Azaña «aprovecharon demasiado» el «movimiento de gratitud hacia la URSS» y provocaron así una creciente oposición a su «política de partido»: «La URSS y la guerra de España», *Obras Completas*, México, 1967, vol. III, pp. 475-479.

(31) Comité Nacional de Enlace de los Partidos Comunista y Socialista, *Programa de acción común*. Valencia, 1973.

(32) «La tarea que da origen a este Pleno es la de la unidad del Partido Comunista con el Partido Socialista, la de la creación del Partido Unico del Proletariado» sobre los principios «marxistas-leninistas-stalinistas»,

afirma Dolores Ibarruri en *Es hora ya de crear el gran Partido Unico del Proletariado*. Informe pronunciado ante el Pleno del CC del PC celebrado en Valencia, en los días del 18 al 20 de junio de 1937. Madrid, 1937, pp. 6, 55 y 63. Véase también *La victoria exige el Partido Unico del Proletariado*. Carta del Buró Político del CC del PCE o la CE del PSOE «junio 1937».

(33) «Sobre los problemas del Comité Central del PCE», 25 de noviembre de 1937, *Escritos*, p. 161.

(34) Como hace Josep M. Bricall, «La economía española», *Historia 16, La guerra civil*, vol. 16, p. 20. Los puntos del acuerdo son los presentados por la UGT y que, juzgados muy duramente por la CNT en su «Circular n.º 3» de 3 de marzo de 1938, son aceptados casi literalmente en la «Circular n.º 5» de 13 de marzo con el argumento de que «responden, casi en su totalidad, a los puntos de vista sostenidos por nosotros». Todas las circulares en SHM, arm. 46, leg. 66.

(35) La carta de Mariano R. Vázquez, por el Comité Nacional de la CNT «Al Secretario del Frente Popular» solicitando la entrada de su organización en el Frente Popular para constituir «de hecho el Frente Popular Antifascista» es de 15 de marzo de 1938. Hay un ejemplar fotocopiado en SHM, arm. 46, leg. 66.

(36) Frente Popular. Comité Nacional: Circular número 1, a los Comités provinciales, enviada por el gobernador civil de Madrid a la Agrupación Socialista Madrileña el 5 de mayo de 1938. SHM, arm. 46, leg 70. En el comité nacional hay dos representantes de cada una de estas organizaciones: Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PC, UGT, CNT y FAI.

(37) Quizá no exista una muestra tan fehaciente de la inanidad del frente popular en 1938 como las actas del comité de Madrid que se conservan en el SHM, arm 46, leg. 70.